

La derecha mueve sus fichas para conquistar las regiones

Centro Democrático, Defensores de la Patria, Salvación Nacional y Partido Republicano se disputan votos de ese sector político para las elecciones de 2027.

Mateo García Agudelo

Subeditor de Política
matgar@eltiempo.com

“Ganamos la batalla de 2026, pero para ganar la guerra hay que ir a por el 2027 y 2030”. “Vamos por las regionales de 2027, con los mejores candidatos y la mirada puesta en 2030”. Las frases son, respectivamente, de Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y estrategia del presidente Abelardo De La Espriella, y de la exsenadora María Fernanda Cabal, protagonistas de la reacomodación de la derecha de cara a las territoriales del 2027.

Pero estos comicios serán distintos. La derecha, hasta hace un año reducida a la figura del Centro Democrático, vive una reconfiguración marcada por el nacimiento de nuevos partidos, fusiones y disputas internas, y no solo se enfrentará a una izquierda que gana terreno, sino también a los partidos tradicionales.

El hecho más reciente fue el nacimiento del Partido Republicano, impulsado por Cabal, quien renunció al Centro Democrático tras no recibir respuesta a su solicitud de escisión. Cabal llegó a un

acuerdo con los herederos del fallecido candidato presidencial Rodolfo Hernández para refundar la colectividad del exalcalde de Bucaramanga y exsenador.

“Desde el Partido Republicano vamos a construir la nueva derecha que siempre soñé: con los ciudadanos que trabajan, crean empresa y defienden la vida, la propiedad privada y nuestra Fuerza Pública”, aseguró la exsenadora este fin de semana desde Bucaramanga.

El nuevo partido surge casi a la par de la fusión anunciada entre Defensores de la Patria, el movimiento con el que De La Espriella llegó al poder, y Salvación Nacional, liderado por el senador Enrique Gómez, quien, tras años de lucha política, logró consolidar el movimiento fundado por su tío, el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.

El Centro Democrático, que nació hace 15 años y era, hasta hace unos meses, el principal referente de la derecha, atraviesa un proceso de renovación y mantiene una disputa con Gómez. El uribismo ya cerró la puerta a alianzas con el dirigente de Salvación Nacional, con quien, desde los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vé-

lez hacia abajo, ha chocado desde la campaña.

En un comunicado, el Centro Democrático se definió como la principal fuerza de renovación política del país, defensora de la seguridad, la inversión privada, la economía fraterna, la política social y la austeridad del Estado, y aseguró que, junto con Uribe, ha formado permanentemente nuevos liderazgos en todas las regiones y logrado renovar la representación parlamentaria.

Añadió: “El Centro Democrático se cansó de las constantes descalificaciones y la actitud displicente. No existe interés alguno en construir coaliciones con quienes, desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos”.

La duda es qué tan unida llegará la derecha a las elecciones y hasta dónde irán las coaliciones, protagonistas de las dos últimas contiendas regionales y que se prevé que lo sean en 2027, pues Defensores de la Patria ha insistido en no hacer alianzas con partidos políticos ni con la clase dirigente tradicional, que históricamente ha reinado en las territoriales.

Cabal insiste en que el enemigo es el “socialismo depredador”

y, en el lanzamiento del partido, rechazó a las clases tradicionales: “Los gobernadores se volvieron reyecitos, rodeados de contratistas y amigos. Desde el Partido Republicano quiero avalar a los mejores, no perpetuar roscas”.

Gómez, en una entrevista con *Semana*, no cerró la puerta a coaliciones, pero con condiciones, y se refirió al uribismo. Dijo que tiene su propio espacio electoral en los territorios, con posiciones

La derecha, hasta hace un año reducida a la figura del Centro Democrático, vive una reconfiguración marcada por el nacimiento de nuevos partidos, fusiones y disputas internas.

muy fuertes que deberá defender y, supone, un plan nacional: “Ya veremos si en algunos lugares tiene sentido hacer coaliciones con ellos o con otros partidos y si logramos llegar a acuerdos en esos escenarios”.

Agregó que la alianza que respalda al presidente De La Espriella es amplia y reúne a partidos

que creen en la democracia y quieren defenderla del riesgo que, a su juicio, representa el Pacto Histórico, que ha demostrado no querer mantener una forma democrática.

El uribismo insiste en que sí puede aliarse con estos nuevos sectores, pero no con Gómez: “No somos sectarios y no estamos con sectarios”, señalaron, y reiteraron principios firmes, apertura para construir sobre coincidencias y rechazo al sectarismo que divide y promueve el odio político. Sus discrepancias, aclararon, son “exclusivamente con Enrique Gómez”.

Los tres partidos coinciden en que no puede haber división, pues daría ventaja a la izquierda, que tiene en la mira recuperar ciudades como Cali, hoy gobernada por Alejandro Eder, y Bogotá, cuyo alcalde es Carlos Fernando Galán. Además, una división en capitales como Medellín, hoy en manos de Federico Gutiérrez, cercano a Defensores de la Patria y cuyo movimiento podría entrar en la fusión, lo que favorecería a la izquierda. No se puede desconocer que Daniel Quintero ya ganó allí. Asimismo, el uribismo luchará por no perder la Gobernación de Antioquia.

En las últimas regionales, el péndulo se ha movido en sentido contrario al de las presidenciales. En 2019, tras la victoria de Iván Duque, hubo un giro hacia la centroizquierda, y en 2023, tras ganar Gustavo Petro, el movimiento se dio hacia la centroderecha. Esto es precisamente lo que quiere evitar la derecha, que busca, desde las regionales, comenzar a allanar el camino para 2030.

El diagnóstico detrás de la reactivación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano

Desde el Batallón de Artillería La Popa n.º 2, en Valledupar (Cesar), en medio de una ceremonia militar, el presidente Abelardo De La Espriella, acompañado de autoridades civiles y militares, reactivó la Fuerza de Tarea Conjunta Urano.

La estrategia busca llevar la lucha contra el robo y el desvío de hidrocarburos a otro nivel: no se limitará a vigilar oleoductos, revisar estaciones de servicio o perseguir conexiones clandestinas, sino que concentrará las capacidades militares para intervenir las zonas donde el combustible alimenta economías como el narcotráfico y la minería ilegal.

La unidad contará con 1.200 uniformados del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, que empezarán sus acciones contra el ‘clan del Golfo’ y el Eln en el Cesar.

El movimiento implica un cambio frente al modelo de la administración anterior, cuando varias fuerzas de tarea conjuntas fueron desmontadas por decisiones del Ministerio de Defensa, entonces

encabezado por Iván Velásquez. Ahora, el Gobierno retoma una fórmula que concentra unidades, inteligencia, movilidad y capacidad aérea y terrestre bajo una planeación común para operar sobre territorios definidos.

La decisión está contenida en la Directiva Permanente 037 del Ministerio de Defensa, que fija los lineamientos para enfrentar el apoderamiento de hidrocarburos y su conexión con lo que la cartera denomina el “Sistema Criminal Híbrido Narcoterrorista Transnacional”.

La instrucción cobija a las Fuerzas Militares y a la Policía, y plantea una respuesta que combina inteligencia, investigación criminal, control territorial, seguimiento financiero y coordinación con otras entidades.

El Comando General de las Fuerzas Militares dirigirá el componente militar: elaborará el planeamiento, supervisará las operaciones conjuntas y definirá la misión, el mando, los componentes, el área de responsabilidad, la duración y las capacidades de Ura-

no, con coordinación de la Policía, que integrará sus capacidades de prevención, inteligencia e investigación criminal sin modificar su naturaleza civil ni su línea de mando.

Las autoridades han identificado varias modalidades por las que el combustible legal termina en circuitos ilícitos: el hurto en poliductos mediante válvulas y mangueras, la extracción de crudo de oleoductos para procesarlo en refinerías improvisadas, el desvío de carrotanques hacia minas ilegales y el uso irregular de estaciones de servicio.

La investigación oficial detectó operaciones en zonas de frontera donde se compra combustible con beneficio tributario para desviarlo hacia actividades ilegales. La directiva menciona tráfico por las fronteras con Ecuador, Perú y Venezuela, e incluso estaciones de servicio que figuran formalmente ante las autoridades, pero que físicamente no existirían y servirían para justificar el suministro a zonas de minería ilegal o narcotráfico.

En paralelo, se reforzarán los controles sobre las estaciones de servicio. La orden incluye revisar periódicamente la distribución y el suministro, reconstruir la trazabilidad del combustible desde su origen hasta su destino final y comparar patrones históricos de consumo para detectar comportamientos inusuales.

La información técnica de las operadoras servirá para localizar



El presidente Abelardo De La Espriella, durante la reactivación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano en Valledupar. FUERZAS MILITARES

conexiones ilícitas, carrotanques, rutas y agentes con movimientos atípicos. El documento dimensiona el problema económico. Al 9 de septiembre de 2026, el Ministerio de Defensa registraba 54 procesos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con pretensiones por cerca de 17,65 billones de pesos.

Por eso, la respuesta dejó de plantearse solo como protección física de tuberías. La misión ordenada a la Fuerza Pública incluye prevenir, investigar y contrarrestar el apoderamiento, el desvío, el transporte, el almacenamiento, la comercialización y la desti-

nación ilícita de combustibles, y la cadena se analizará completa, desde que desaparece un galón hasta que se convierte en insumo de otra economía criminal.

Urano tendrá dos frentes paralelos. Uno será territorial, con operaciones sobre conexiones clandestinas, corredores de transporte, centros de acopio e infraestructura de las organizaciones. El otro será financiero y judicial, con el rastreo del dinero, la identificación de responsables y la afectación de los bienes que sostienen la operación.

Jesús A. Blanquicet - Justicia